

EVOLUCION RECIENTE Y PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA EN LA REVOLUCION SANDINISTA *

*CARLOS M. VILAS ***

I. INTRODUCCIÓN

Indagar sobre la evolución reciente y sobre las perspectivas económicas de la Revolución Sandinista es una tarea compleja. La economía de Nicaragua y el proceso revolucionario están atravesando una coyuntura muy tensa, llena de contradicciones profundas. Esta coyuntura es, sin dudas, tributaria de la aguda crisis que agita a toda América Central, pero también es el resultado de factores específicos de la realidad nicaragüense.

El gobierno revolucionario ha debido hacerse cargo de los pesados costos de reconstrucción planteados por la guerra contra el régimen somocista en 1978-79. La econo-

* Versión revisada del documento presentado en el Seminario "Socialist Development Efforts in Third World Countries". Copenhague: Center for Development Research, 21 de febrero de 1986.

** Centro de Investigaciones y Documentación de la Costa Atlántica (CIDCA), Nicaragua.

mía se vio afectada además por dos años de lluvias anormales -1982 y 1985- y por el impacto del huracán Alletta en 1982. Ha debido enfrentar también crecientes restricciones en el financiamiento externo, especialmente de organismos oficiales de carácter multilateral. Agravando esta situación, a principios de 1985 el gobierno de los Estados Unidos decidió un embargo comercial que afectó aproximadamente 12% del comercio exterior de Nicaragua. Finalmente, pero primero desde fines de 1983, la guerra contrarrevolucionaria financiada, entrenada, pertrechada y propagandizada por la Casa Blanca. Además de lo que significa en muerte y destrucción, esta guerra determina que en los momentos actuales algo más de la mitad de los gastos del gobierno de Nicaragua deben destinarse a la defensa nacional.

Por otro lado, la experiencia de casi siete años de revolución muestra la gran capacidad del gobierno sandinista de dar virajes profundos en materia de política económica. El compromiso de principio de la revolución se refiere a la estrategia global de unidad nacional y economía mixta, en el marco de un proceso democrático, popular y antiimperialista. Dentro de estos parámetros sustantivos no parece haber compromisos de principio con líneas determinadas de política económica, o con cursos de acción específicos. Por lo tanto, cualquier intento de indagar el curso probable de los acontecimientos futuros queda siempre prisionero de un marco de provisoriedad.

Por añadidura todo proceso económico se desenvuelve siempre ligado de manera estrecha a factores de tipo político. La politización de la economía es mucho mayor en un proceso de transformaciones revolucionarias, porque en éste la constitución del nuevo poder político precede a las modificaciones en la estructura socioeconómica. La nueva economía y la nueva sociedad existen primero como proyecto político -no necesariamente acabado o definitivo- y después como realidad objetiva. Más claramente que en otras circunstancias, la economía es, en un proceso revolucionario, economía *política*, y la racionalidad de la política -es decir, de la práctica de la organización y conducción de la sociedad, de las alianzas y antagonismos, de la lucha por la consolidación de un poder de clase- suele imponerse, por lo menos en los momentos iniciales de la revolución, a la racionalidad estrictamente económica del costo y beneficio.

En el apartado siguiente se presenta de manera muy resumida la estrategia económica adoptada por el gobierno revolucionario de Nicaragua y algunos de sus principales resultados. Luego, la tercera sección expone las modificaciones introducidas a esa estrategia a partir de 1985. Finalmente, se discuten, desde una perspectiva macro, las tendencias probables de evolución futura.

II. LA ESTRATEGIA ECONÓMICA: PLANES AMBICIOSOS Y FRUTOS AMARGOS

La estrategia económica adoptada por el gobierno revolucionario de Nicaragua ha sido estudiada con cierto detenimiento en varios trabajos anteriores del autor (cf. por ejemplo Vilas 1985a, 1985b, 1986). Señalemos aquí, a manera de rápido resumen, que desde el inicio esa estrategia estableció la agroexportación como el sector en que habría de desarrollarse lo fundamental del proceso de acumulación. Definió, por lo tanto, una cierta continuidad con la etapa anterior a la revolución. Es posible que haya influido en esto la experiencia de los años iniciales de la revolución cubana, y el impacto negativo en su economía de desatender el sector agroexportador. El gobierno sandinista reconoce que si bien la agroexportación fue el eslabón que encadenó a Nicaragua a la economía mundial capitalista, también es el área de la economía de mayor desarrollo relativo, y con cierta especialización internacional. De tal manera que, si por un lado, las críticas revolucionarias al capitalismo dependiente en Nicaragua enfatizaron su carácter agroexportador (Wheelock 1976; Núñez 1980) por otra parte la economía política de la revolución optó por mantener esta especialización, *pero introduciéndole transformaciones*.

En efecto: la estrategia económica del somocismo definía una fuerte contradicción entre la agroexportación y la producción de granos básicos. La primera estaba dotada de las mejores tierras, la casi totalidad del financiamiento, la tecnología más moderna, los precios relativos más favorables y se encontraba organizada en empresas capitalistas modernas, mientras que la segunda estaba en manos de una masa de pequeños agricultores con tierras de mala calidad, técnicas primitivas y alejados de los mercados. Dicho sintéticamente, existía una contradicción profunda entre agroexportación y producción de alimentos.

En el diseño revolucionario se trata, en cambio, de 1) modificar las relaciones de producción imperantes en la sociedad, como medio de 2) expandir las fuerzas productivas, profundizar la integración agroindustrial de la estructura productiva y mejorar los niveles de vida de las clases populares, y 3) redefinir la inserción externa de la economía nacional. La contradicción *agroexportación vs. alimentos* de la etapa somocista es reemplazada en el proyecto revolucionario por un objetivo doble: *agroexportación + alimentos*, acumulación a través de la agroexportación y autosuficiencia alimentaria.

Las dimensiones más importantes de esta estrategia son en general conocidas: una reforma agraria que redujo drásticamente el poder de la oligarquía terrateniente, la creación de un sector estatal (el Área de Propiedad del Pueblo, APP) que se hizo cargo de varios sectores importantes de la economía (comercio exterior, sistema financiero, una proporción importante de la producción y de la comercialización in-

terna), el desarrollo de las fuerzas productivas a través de un ambicioso programa de inversiones públicas, la progresiva reinserción en el mercado internacional por la vía de la diversificación de las exportaciones, la incorporación de mayor valor agregado, y la captación de nuevos mercados en el Tercer Mundo y el área socialista.

Durante 1980 y 1981 la estrategia económica del gobierno revolucionario produjo resultados satisfactorios: la producción se reactivó aunque con desniveles, las demandas básicas de la población fueron satisfechas, los servicios sociales y educativos se expandieron de manera extraordinaria, comenzaron a ejecutarse los grandes proyectos de inversión. A partir de 1982, sin embargo, problemas y desajustes comenzaron a hacerse sentir: desaceleración general de la actividad económica y tendencias recesivas; caída rápida de los ingresos de exportación, creciente endeudamiento externo; sobremonetización de la economía, auge del mercado negro y de las actividades de especulación; aceleración de las tendencias inflacionarias.

Cuadro 1

Desaceleración del crecimiento

(Evolución del producto global y por habitante, 1980-1985, en %)

Años	PIB	PIB por habitante
1980	10.0	6.7
1981	5.3	2.0
1982	- 1.2	- 4.4
1983	4.7	1.3
1984	- 1.5	- 4.8
1985*	- 2.5	- 5.9

Fuente: CEPAL

*Preliminar

A pesar de estos registros Nicaragua sigue comparándose ventajosamente con las otras economías centroamericanas; entre 1980 y 1985 la variación acumulada del PIB por habitante fue -11.6%, mientras en Costa Rica fue de -13.8%, en El Salvador de - 23.8%, Guatemala -18.5% y Honduras -13.0%. Pero de todas maneras el desempeño real, y el curso negativo reciente, contrasta marcadamente con las expectativas iniciales. Varios factores han incidido en estos resultados. Entre los principales puede mencionarse la retracción de la inversión privada capitalista (que cayó de más de

50% de la inversión fija total en 1979 a alrededor de 20% en la actualidad), mientras la inversión pública se orientó principalmente a grandes proyectos de maduración lenta y administración compleja; los ingresos de exportación se han contraído vertikalmente; la crisis de divisas dificulta dramáticamente el abastecimiento del sistema productivo; faltan insumos y repuestos.

En términos generales la producción para el mercado interno se recuperó más rápidamente que la producción de exportables; dentro de la producción para el mercado interno, los rubros donde la participación campesina es mayor mostraron una evolución más favorable que aquellos donde predomina la producción de empresas capitalistas (cf. Vilas 1985b, cuadro 7). Pero la expansión del consumo fue mayor que el incremento de los volúmenes de producción y obligó a aumentar la importación de alimentos -granos básicos en primer lugar.

Cuadro 2

Crisis del sector externo
(Millones de dólares)

	1980	1981	1982	1983	1984	1985*
Exportaciones	451	500	406	428	393	320
Importaciones	803	92	723	778	775	750
Balanza comercial	- 352	- 422	- 317	- 350	- 382	- 380
Cuenta corriente de la balanza de pagos	- 512	- 585	- 514	- 519	- 517	- 560
Deuda externa to- tal desembolsada	1.588	2.200	2.730	3.324	3.900	4.370
Variación de los términos del in- tercambio (1980 = 100)	100	90	79	69	74	66

Fuente: CEPAL e INEC

* Estimaciones preliminares.

La reducción de los ingresos de exportación (cf. cuadro 2), que siempre es grave para cada economía del Tercer Mundo, significó un problema mucho más serio para una estrategia agroexportadora como la que el gobierno revolucionario había escogido. Varios factores incidieron en esta situación: 1) desenvolvimiento errático y tendencialmente negativo de los precios internacionales; 2) estancamiento e incluso reduc-

ción en los volúmenes exportados; 3) deterioro de los términos del intercambio agravado por un tipo de cambio que sobrevalúa la moneda nacional; 4) comportamiento recesivo de amplios sectores de la empresa privada; 5) impacto de la guerra, especialmente en el café (primer rubro de exportación), la minería, la explotación forestal y la pesca. Esta situación se traduce en un persistente déficit de la balanza comercial, alimenta el déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos y presiona sobre la carga creciente del endeudamiento externo.

El compromiso político de atender a las demandas más elementales de las mayorías populares -los déficits históricos de alimentación, salud, educación...- y la necesidad de desarrollar las fuerzas productivas, condujeron a una política expansiva financiada por el ingreso inicialmente amplio de recursos líquidos externos. Sin embargo la lenta maduración de los proyectos de inversión y la difícil recuperación de los niveles de producción llevaron a fuertes desajustes fiscal-financieros - principalmente un rápido crecimiento del déficit fiscal, del medio circulante y del coeficiente de liquidez- y a una fuerte sobremonetización de la economía (cf. cuadro 3).

Cuadro 3

Explosión de la esfera monetaria
Millones de córdobas de 1980)

Años	Activos líquidos	Medio circulante	Coeficiente de liquidez
1979	7.843,0	4.364,3	39,3
1980	6.945,2	4.431,7	31,7
1981	5.885,8	4.808,5	34,3
1982	8.170,2	5.313,6	35,8
1983	11.008,5	7.588,4	45,9
1984	14.670,3	10.743,2	67,0
1985*	11.947,7	9.669,5	52,7

Fuente: Elaboración propia sobre la base de cifras de INEC

*Estimaciones.

La política de contención del salario nominal se tradujo, en un ambiente altamente inflacionario (cuadro 4) en una caída fuerte del salario real. Los estímulos y compensaciones de carácter material -lo que en los años iniciales se llamó *salario social* y más recientemente *salario en especie*- mejoraron el ingreso de algunas reducidas categorías de trabajadores urbanos, pero marginaron a la masa de asalariados, entre

ellos la casi totalidad de los obreros agrícolas, y en todo caso el costo de reforzar los mecanismos de alimentación del mercado negro y, por esa vía, el proceso inflacionario. En el campo la política de salarios bajos mantenida hasta fines de 1984 se combinó con los problemas de abastecimientos, la oferta de tierra para la reforma agraria y el reclutamiento militar para la defensa, generando problemas graves de falta de fuerza de trabajo para las cosechas de exportación y el mantenimiento de los cultivos (Vilas 1984). La política de precios relativos agro/industria, y agroexportación/mercado interno, combinada con el desajuste de los mecanismos de abastecimiento, discriminó negativamente al campesinado, redujo el impacto de otras políticas orientadas a mejorar la situación del sector y creó un espacio en el cual operó durante varios años la contrarrevolución.

Cuadro 4

Aceleración del proceso inflacionario

Años	Indice de precios mayoristas	Indice de precios minoristas		
		General	Alimentos, bebidas y tabaco	Indice del precio del dólar "negro"
1980	100	100	100	100
1981	118	124	129	133
1982	130	155	166	214
1983	145	203	235	386
1984	201	274	333	1.005
1985	530	529	614	3.619

Fuente: Estimaciones propias sobre la base de información de INEC y Ministerio del Trabajo.

La transferencia de los excedentes financieros hacia las actividades de especulación y hacia el exterior se vio favorecida por la autonomización creciente de la esfera de la circulación. A ello contribuyó la reducida eficacia de los mecanismos estatales de control, no menos que el resultado objetivo de algunos instrumentos de política: la dolarización creciente de los incentivos a la inversión privada, el establecimiento de un mercado libre de cambios, el financiamiento generoso con tipos de interés negativos, la baja capacidad de recuperación de la cartera de créditos del sistema financiero. El desencadenamiento de las tendencias inflacionarias se realimentó con estos elementos y aceleró una corrida amplia de excedentes líquidos hacia la especulación con

el dólar; la divisa estadounidense se convirtió en una inversión de rentabilidad privilegiada (cf. cuadro 4).

La capacidad del estado para conducir el desenvolvimiento de la economía mostró ser muy reducida. En términos de conducción directa, porque el sector público de la economía representa una proporción minoritaria de la actividad productiva, y porque aún así los niveles de eficacia y la eficiencia de las empresas estatales todavía no son superiores a los de las empresas capitalistas. En términos indirectos, por la ya mencionada reducida eficacia de muchos de los instrumentos de política económica o financiera, y como resultado objetivo de algunas orientaciones y opciones de esa misma política que, planteándose acompañar el movimiento del mercado para captar parte del excedente que circula en él y reorientarlo hacia la inversión pública productiva, han significado en la práctica -con algunas excepciones- un reforzamiento de ese movimiento y, por lo tanto, un estímulo.

En resumen, a fines de 1984 la economía de Nicaragua presentaba un panorama complicado: una estrategia de *agroexportación + alimentos* que exporta cada vez menos y todavía no ha sido capaz de alcanzar la autosuficiencia alimentaria.

Las tensiones se acumulaban de manera alarmante, ante la incapacidad de los instrumentos de política, y de la propia concepción global de la política económica para acompañar, ya que no conducir, los movimientos de la economía. La caída vertiginosa del salario real desplazaba a porciones crecientes de los asalariados del sector productivo hacia el autoempleo, la intermediación y los servicios;¹ el sector público perdía fuerza de trabajo en beneficio del sector privado. En el campo, la insatisfacción por la lentitud de la reforma agraria, la política de precios, de comercialización y de abastecimiento, sensibilizaba a sectores del campesinado a las interpelaciones ideológicas del gobierno norteamericano y la contrarrevolución.

El mantenimiento de la estrategia de amplias alianzas con la empresa privada en un contexto de recesión productiva y crisis externa se tradujo en un fuerte deterioro de los ingresos y las condiciones de vida de los asalariados y el campesinado. Entre tanto, la estrategia de *economía mixta y unidad nacional* no ha impedido que la cooperación técnica, económica y financiera de Europa Occidental se haya reducido a niveles mínimos, ni que el gobierno de los Estados Unidos haya arribado a niveles extremadamente intensos de enfrentamiento con Nicaragua, a la que acusa de haberse convertido en "otra Cuba"...

En estas condiciones el impacto de la guerra es más gravoso aún. A los efectos desarticulantes del atraso y de la crisis externa se suman las presiones del conflicto. Las guerras pueden actuar como estímulos de la economía cuando se libran fuera de las fronteras y se cuenta con un aparato productivo integrado; no cuando cada córdoba

que se invierte en la defensa hay que quitárselo a la producción, y cuando el teatro de las operaciones es el corazón de las zonas productivas propias. La economía nicaragüense empezó a deteriorarse en el segundo semestre de 1982, cuando los niveles de agresión militar eran relativamente reducidos, pero la intensidad adquirida por la guerra contrarrevolucionaria desde 1983 ha agravado las tensiones y contradicciones preexistentes, sumando las que se derivan del conflicto mismo.

III. LA REORIENTACIÓN DE 1985

Los cambios de orientación comenzaron a ejecutarse a principios de 1985. Ellos consisten principalmente en la implementación de un programa de ajuste monetario, y en una mayor receptividad a las demandas del campesinado.

1. *El programa de ajuste.*² El programa que comenzó a ser ejecutado en febrero de 1985 contempló una fuerte contracción del gasto público por la vía de la eliminación de los subsidios a los productos de primera necesidad y los servicios básicos (con excepción del transporte), la reducción del gasto social, la congelación de las vacantes del sector público, un aumento sustancial en las tarifas del sector público y en los precios de las empresas del estado, restricción crediticia, mayor control en la recuperación de la cartera de créditos y elevación de los tipos de interés, pasivos y activos. Se propuso asimismo reducir la sobrevaluación del córdoba recurriendo a una devaluación parcial y al restablecimiento de un mercado libre de divisas -sometido de hecho a supervisión del Banco Central-. Además se estableció el cobro directo en dólares de un conjunto de precios y tarifas, y se amplió el sistema estatal de ventas en dólares al consumidor. La presión impositiva sobre el comercio, el autoempleo, los sectores profesionales y rentistas se incrementó, y se definió una política de enfrentamiento y control de las actividades especulativas, cuya expansión se trataría de revertir.

El impacto de la eliminación de los subsidios sería compensado con el aumento de los precios al productor -incluyendo un refuerzo a la política de dolarización parcial de los mismos- y, posteriormente, de los salarios. Las inversiones programadas se someterían a cuidadoso examen; sólo se mantendrían las inversiones productivas, dándose preferencia a los proyectos de ejecución fuera de Managua. En el fondo, el programa de ajuste buscaba sanear las deterioradas finanzas del estado, revirtiendo al menos parcialmente el sentido de la transferencia de excedentes de los años anteriores. Entre 1980 y 1984 el estado transfirió excedentes financieros hacia el sector privado; ahora debería ser la "sociedad civil" la que transfiriera ingresos hacia el sector público.

Las primeras iniciativas para poner en marcha un programa de este tipo datan de mediados de 1983; de manera inorgánica, algunas medidas ya habían comenzado a

ejecutarse como resultado de la propia necesidad. Para 1984 por ejemplo, las inversiones nuevas se habían reducido sustancialmente; 4/5 partes de la inversión pública, o 2/3 de la inversión total, se refería a proyectos de arrastre, y la inversión en infraestructura social estaba sometida a fuertes recortes.³ Pero el programa encontraba resistencia dentro del FSLN y del gobierno revolucionario, por el impacto que podría llegar a tener en los ingresos, ya deteriorados, de los asalariados, y por las repercusiones posibles de esto en las actitudes políticas de los afectados. Sin embargo la incapacidad de las opiniones opuestas al programa para proponer una alternativa, el rápido agravamiento de las distorsiones y desequilibrios, y sobre todo la necesidad de tomar medidas ante la guerra contrarrevolucionaria y el espacio propagandístico que le abría el descontrol económico, crearon las condiciones políticas para la aceptación del programa. El inicio del programa coincidió asimismo con los cambios en el aparato del estado que siguieron a las elecciones generales de noviembre de 1984, que buscaron alcanzar una mayor coherencia de gestión entre el estado y el FSLN. La junta de gobierno colegiada fue reemplazada por una presidencia unipersonal con una fuerte concentración de atribuciones; se reestructuró el organigrama del gobierno central y se introdujeron modificaciones en el gabinete ministerial; los mandos del gobierno y del FSLN fueron unificados para evitar dualidad de criterios, demoras y contradicciones.

Los resultados obtenidos luego de un año distan de lo que se esperaba. El curso inflacionario se aceleró, la caída de la producción se agravó, el endeudamiento externo se profundizó -pero se redujo el ritmo anterior. El déficit fiscal aumentó, superando el 30% frente a 23,5% en 1984. No obstante las variables monetarias parecen haber comenzado a ser controlables; el circulante se redujo en términos reales casi 10% y los activos líquidos 18,5%; el coeficiente de liquidez fue casi 53%, es decir un quinto menor que el año anterior (cf. supracuadro 3). La reducción del gasto público fue una meta de cumplimiento imposible a causa de la guerra y de las resistencias en algunos ámbitos del estado a recortar el programa de inversiones públicas. Más bien se registró un cambio en la composición interna del gasto, reduciéndose algunas partidas para hacer posible el crecimiento del gasto de defensa. La recaudación impositiva se incrementó pero el objetivo de captar contribuciones de las ganancias obtenidas en el sector informal y las actividades "independientes" -profesionales, técnicos y similares en condiciones de autoempleo- probó ser de cumplimiento difícil y costoso, tanto en términos técnicos -por la poca sofisticación de los instrumentos tributarios- como políticos.

Los reajustes salariales no lograron compensar los aumentos de precios decretados para balancear la suspensión de los subsidios. Lo reajustes autorizados entre octubre de 1984 y mayo de 1985 oscilaron entre 111% y 183% (cf. cuadro 5), pero los aumentos autorizados en los precios oficiales al consumidor fluctuaron entre 110% y 483%

(cf. cuadro 6); a lo largo de 1985 el poder adquisitivo del salario se deterioró en casi 50% promedio.

Cuadro 5

Reajustes salariales entre octubre de 1984 y mayo de 1985
(Córdobas corrientes)

	Octubre 1984	Marzo 1985	Mayo 1985	Aumento (Mayo/Oct.)
Obrero no calificado	1.700	3.000	4.500	1.65
Obrero calificado	3.500	6.000	9.900	1.83
Técnico medio	8.000	12.000	18.100	1.26
Dirigentes y profesionales	12.000	16.800	25.300	1.11

Fuente: Ministerio del Trabajo

Cuadro 6

Impacto del programa de ajuste en los precios al consumidor
(Aumentos autorizados durante 1985 en los precios oficiales, en córdobas)

Producto	Medida	Precios oficiales		Aumento (en %)
		Enero	Abril	
Maiz	Libra	2.40	12.00	400
Frijol	Libra	4.00	16.00	300
Arroz	Libra	4.75	10.00	110
Sorgo	Libra	1.40	8.79	528
Pollo	Libra	25.00	122.00	388
Huevos	Docena	25.00	103.00	312
Aceite	Galón	60.00	273.00	355
Harina	Quintal	194.00	620.00	220
Azúcar	Quintal	1.85	10.80	483

Fuente: Ministerio de Comercio Interior

A principios de 1986 un nuevo incremento elevó los salarios en 90% promedio, pero fueron seguidos por nuevos incrementos de precios al productor y al consumidor que fluctuaron entre 100% y 150%. La nueva política de precios al consumidor tampoco produjo el efecto pretendido de reducir la brecha entre los precios oficiales y los del mercado negro, o paralelo, en el que se canaliza una proporción importante de la oferta de productos de consumo cotidiano. Después de un momento inicial inmediatamente posterior al anuncio del paquete de ajuste -marzo-abril de 1985- el sistema de precios paralelos se recuperó en una proporción similar a la del aumento de los precios oficiales y se mantenía en ese nivel -100% promedio para los bienes de consumo básico- durante el primer trimestre de 1986. La especulación con el dólar *negro* fue espectacular: mientras el índice de precios minoristas se duplicó respecto de 1984, y el de precios mayoristas algo más, el índice del dólar *negro* casi se cuadruplicó (cf. supracuadro 4).

La transferencia de fuerza de trabajo hacia los sectores no productivos prosigue. Por primera vez, sin embargo, la política de reajustes salariales incluyó entre sus metas la reducción de la brecha entre salarios rurales y salarios urbanos; la diferencia, que había llegado a ser de 30% en detrimento de los obreros agrícolas, se redujo sensiblemente. Sin embargo no se ha podido encontrar todavía una solución a los problemas de abastecimiento para los trabajadores de la agroexportación, y esto ha incidido en una drástica reducción de la duración de la jornada de trabajo.

2. *La cuestión campesina*: La estrategia de desarrollo agropecuario adjudicó al campesinado un papel secundario, marginal incluso. La siguiente transcripción de uno de los viceministros del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria (MIDINRA) resume la posición oficial:

”En cuanto al campesinado como unidad productiva que pueda asegurar una dinámica expansiva dentro de las condiciones estructurales existentes en nuestro agro, no es una alternativa viable y más bien debe verse como una entidad a ser transformada. Básicamente debe integrarse al movimiento cooperativo o a formas de producción de productos especiales en condiciones particulares, que seguramente se darán pero no visualizo como importantes La posesión de tierras de ninguna manera resolverá el problema, ya que éste es estructural, o sea el problema persistirá a corto plazo y se irá agravando a mediano y largo plazo (Coronel 1984).”

Coherente con este enfoque, a fines de 1984 la reforma agraria no había modificado significativamente la dotación de tierras del campesinado (cf. Vilas 1985b), aunque una proporción relativamente grande de latifundios aún no había sido afectada. La reforma agraria se orientó entre 1981 y 1984 a la creación de un Área de Propiedad del Pueblo (APP) y a la promoción de una estrategia de desarrollo cooperativo, otor-

gando una atención marginal a las demandas campesinas que reclamaban tierra a título individual -de hecho, familiar. En la región V (departamentos de Boaco y Chontales) por ejemplo, 35 de los productores privados poseían en 1984 el 22% de la tierra, mientras 41% de pequeños productores contaba con sólo 8,5%; en todo el país, cerca de 20% de la población campesina tenía aún problemas de tierra, ya por carecer de ella, o por una dotación insuficiente.⁴ A pesar de esto, en diciembre de ese año MIDINRA, tratando de aplacar los temores de los grandes productores privados, anunció la progresiva suspensión de la aplicación de la ley de reforma agraria; en el futuro el énfasis estaría:

”...no ya en la recuperación de tierras, sino en el aspecto organizativo.” (MIDINRA 1985:33).

Sin embargo a mediados de 1985 la presión campesina por tierra, combinada con la oposición a la política de precios y comercialización, y las resistencias en algunos sectores al proceso de cooperativización, forzaron al gobierno revolucionario a dar un viraje y a iniciar un proceso de entrega amplia de tierras al campesinado. Para tal fin, se procedió a afectar grandes fincas privadas y algunas empresas del APP. El gobierno revolucionario había sido llevado a enfrentarse a un dilema político: congelar la aplicación de la ley de reforma agraria, para reducir los temores de los grandes productores y mantenerlos neutralizados respecto de las solicitudes contrarrevolucionarias, pero al precio de enajenarse sectores amplios del campesinado, o bien satisfacer la demanda campesina de tierra y ampliar la afectación de fincas -incluso por debajo del “piso” legal de 500 mz- al precio de espantar a los terratenientes *patrióticos*.

Las modificaciones introducidas en la ley de reforma agraria en enero de 1986 tratan de dar respuesta a este dilema. El nuevo texto legal amplía las tierras susceptibles de ser afectadas a la reforma agraria, bajando el límite inferior de 500 mz a 100 y 50 mz, de acuerdo a la zona del país, y mantuvo las causas de afectación de la ley anterior (ausentismo, ineficiencia o abandono). Esta decisión le permite al estado contar con un fondo potencial de tierras mucho mayor a expensas del conjunto de los propietarios, y no solamente de los grandes terratenientes que aún subsisten. En los hechos, esto puede llegar a significar que las demandas campesinas y la tranquilidad terrateniente sean satisfechas a expensas de los medianos productores ausentistas, ineficientes o que abandonen sus tierras, y de las fincas del APP.

Es prematuro formular proyecciones sobre este aspecto. Queda, entretanto, el hecho cierto del carácter marcado del viraje adoptado a partir de mediados de 1985: mientras entre 1981 y 1984 la reforma agraria asignó a los campesinos 50 mil manzanas, en 1985 -de hecho, entre junio y diciembre de ese año- les entregó casi 160 mil. Vale decir que, de toda la tierra asignada por la reforma agraria al campesinado entre 1981

y 1985, 75% le fue asignada en 1985 -de hecho a partir de junio de ese año. Casi dos tercios de esa superficie provino de las fincas del APP.

Paralelamente, la política de comercialización forzosa por los canales estatales se ha flexibilizado considerablemente, en particular en las zonas de guerra, y el abastecimiento rural está siendo mejorado.⁵ Las modificaciones recientes en la política de precios agropecuarios tratan de dar respuesta a las demandas campesinas, pero la política de incentivos y estímulos apunta todavía, fundamentalmente, hacia los grandes productores. Durante todo 1985, y en lo que va de 1986, esta política, y su progresiva ampliación, ha suscitado críticas de los representantes del campesinado y la mediana burguesía agraria, pero sin producir cambios en lo que parece ser una sólida convicción tanto del gobierno como del FSLN.⁶

En un contexto recesivo la política de dar prioridad al abastecimiento del campo se desarrolla en detrimento del abastecimiento de las ciudades; en el marco de una economía mixta, esto implica una transferencia de excedente que en definitiva es financiada por los grupos de menores ingresos: deterioro de los servicios sociales, reducción de los niveles de abastecimiento básico, aumento de la pobreza urbana.⁷ Hemos señalado en otro lugar (Vilas 1986 cap. III) que deterioro de las condiciones de vida de los asalariados urbanos no significa exactamente deterioro de las condiciones de vida del *proletariado*, dado el peso reducido de la clase en el conjunto de los asalariados de la ciudad; pero es evidente que en la degradación general de las condiciones de vida de las clases populares urbanas participan también los asalariados productivos.

3. *La estrategia global*: La reorientación de la reforma agraria hacia el campesinado forma parte de reformulaciones más amplias de la estrategia de *agroexportación + alimentos*. Desde fines de 1985, varios pronunciamientos del FSLN y del gobierno revolucionario indican mayor atención a las demandas campesinas y mayor énfasis en el segundo término de la estrategia -la seguridad alimentaria. En efecto: si bien no es exacto identificar campesinado con producción para el mercado interno, y gran propiedad capitalista con agroexportación, de todas maneras un mayor apoyo al pequeño productor implica en los hechos mayor respaldo a la producción para el mercado interno. Al cambiar el énfasis, el gobierno revolucionario y el FSLN se notifican de una realidad evidente: la agroexportación no está funcionando, y en cambio el campesinado mejoró sus niveles productivos con base en expectativas de tiempos mejores, a pesar de una política financiera que postergó muchas de sus demandas más importantes.

En particular fue sometido a críticas el programa de inversiones públicas, con proyectos voluminosos, de maduración relativamente lenta y administración compleja, intensivos en capital, que presionaban de manera muy fuerte sobre la capacidad de endeudamiento externo inicialmente y, cuando éste se restringió, sobre la financia-

miento interno y el creciente déficit fiscal. Este programa había suscitado agudas polémicas en el seno del FSLN y del gobierno revolucionario durante 1980 y 1981, pero varios factores -entre ellos la falta de propuestas alternativas- determinaron su puesta en marcha, en el marco del clima expansivo y entusiasta, triunfalista incluso, de la época. Cinco años más tarde, las cosas han cambiado. En un clima signado por el esfuerzo de guerra, por la gravitación decisiva de los grandes proyectos de inversión pública en el descalabro de las finanzas públicas y en el proceso inflacionario, la revolución admite, desde sus más altos niveles, que el paquete inversionista del estado, con la excepción de algunos proyectos, no estuvo sustentado por estudios adecuados, que superó las capacidades técnicas, materiales y financieras de ejecución, y que está siendo financiado totalmente mediante el déficit fiscal sustentado en la expansión monetaria.

En consecuencia, la estrategia de grandes inversiones públicas ligadas a la agroexportación se encuentra actualmente bajo cuestionamiento. En todo caso parece de más en más evidente que la economía del país no está en condiciones de soportar *al mismo tiempo* el esfuerzo de guerra y el esfuerzo del programa de grandes inversiones. Sin perjuicio del fuerte compromiso que existe todavía con la estrategia de grandes proyectos intensivos en tecnología y capital, los hechos, más que los programas económicos, han forzado a reducir el esfuerzo inversionista.⁸

IV. UN FUTURO CON INTERROGANTES

Los aspectos que acabamos de resumir, combinados con el peso creciente de la agresión externa, diseñan perspectivas particularmente difíciles para la economía nicaragüense y el conjunto de la sociedad.

El eje de la estrategia de agroexportación reposa, obviamente, en la capacidad de exportar, pero las perspectivas del mercado internacional son poco alentadoras. Nada permite esperar con certidumbre un cambio substancial en la tendencia decreciente de los precios externos de la producción nicaragüense, salvo la intercesión de algún acontecimiento fortuito, como ha sido recientemente el caso de los precios internacionales del café.

La atonía de la inversión privada a pesar de los estímulos de la política económica y de los márgenes de ganancia que se registran en la producción de exportables vulnera adicionalmente la estrategia. La empresa capitalista genera aún entre un tercio y la mitad de la producción de exportación; es de preverse que el comportamiento a la baja de la burguesía exportadora se mantendrá en el futuro próximo, independientemente del comportamiento activo de algunos miembros individuales de la clase. A pesar de los incentivos con que se trata de estimular su reactivación inversionista

en el marco de la economía mixta, el régimen político-económico que la revolución promueve no resulta atractivo para la burguesía nicaragüense. La existencia de organizaciones sindicales con capacidad de supervisión -o por lo menos de denuncia- de las condiciones laborales o de producción en las empresas, la reglamentación amplia de la actividad económica -al margen de su eficacia poco satisfactoria-, la creciente reglamentación estatal y sus numerosos trámites, chocan, junto a otras cosas, contra la subjetividad plagada de temores y de prejuicios de una burguesía como la nicaragüense. Además, las restricciones a las importaciones no esenciales por la creciente escasez de divisas reduce la posibilidad de realización del excedente por la vía del consumo y resta atractivos al mantenimiento del nivel de la actividad productiva; hasta el momento la política de dolarización creciente de los incentivos ha podido modificar sólo parcialmente esta conducta. Subordinada políticamente, desarmada militarmente, enfrentada a la posibilidad de la confiscación total si se suma a la contrarrevolución o abandona el país, contrabandeando sus hijos al exterior para evadir su reclutamiento por el servicio militar, la burguesía nicaragüense vive un verdadero infierno -poco propicio sin dudas para la inversión productiva y el cálculo de rentabilidad empresarial.

Tampoco es previsible que disminuya la intensidad de la guerra contrarrevolucionaria y el apoyo que le brinda el gobierno de los Estados Unidos. Por lo tanto, la profunda desarticulación general que ella genera sobre el conjunto de la sociedad se agravará, independientemente de la capacidad del Ejército Popular Sandinista para infligir sucesivas derrotas a las fuerzas contrarrevolucionarias. Un aspecto importante del enorme precio que el país debe pagar por el mantenimiento de su soberanía es un agudo deterioro en los años recientes en los servicios públicos, la educación, la asistencia hospitalaria, que afecta en primer lugar a sus clases populares.

Todo lleva a anticipar, por lo tanto, una desaceleración creciente de la mayoría de las actividades productivas, la caída tendencial del producto global, el deterioro de las condiciones de vida de la mayor parte de la población y, en lo que toca a la estrategia agroexportadora en sí misma, el mantenimiento de la caída de los ingresos de exportación.

En el futuro inmediato puede preverse que el cierre de la economía se agudizará. En principio esto no es incompatible con una estrategia agroexportadora que se apoya, entre otras cosas, en la redefinición de su articulación externa. La experiencia de otros procesos revolucionarios, y las propuestas tipo Nuevo Orden Económico Internacional, plantean que toda la reinserción externa pasa siempre por una previa desinserción externa; ésta es una de las condiciones para poder llevar a cabo las transformaciones internas que pondrán "a punto" a la economía para rearticularse externamente.

Ahora bien: el costo de esta des-inserción (aunque sea provisoria) para una economía como la nicaragüense, tradicionalmente muy abierta hacia afuera, es muy oneroso. En primer lugar, por la fuerte dependencia de importaciones para el funcionamiento del aparato productivo; la compresión de esas importaciones por debajo de un nivel que parece haberse alcanzado podría llevar a paralizar sectores amplios de la producción en detrimento incluso de la propia estrategia agroexportadora. La situación de Nicaragua muestra por lo tanto la combinación perversa de una desarticulación externa en materia de ingresos de exportación, y un agravamiento de la articulación dependiente por la vía del endeudamiento, los déficits externos y la incorporación de los precios internacionales a través del mercado paralelo (o negro) y la especulación con las divisas.

Los costos son también de tipo político: se señaló más arriba que la estrategia agroexportadora marca una línea de parcial continuidad con el estilo precedente de acumulación y articulación externa, y define un ámbito de relacionamiento con elementos de la burguesía nicaragüense que apoyaron la lucha contra Somoza o la vieron con simpatía, aunque sin vincularla posiblemente a cambios profundos en la sociedad. Una economía menos abierta, más autocentrada, implica mayor prioridad a sectores de producción con un perfil más campesino, y una atención más decidida a todo lo que se refiere al mercado interno, al consumo básico y a actividades que presionan menos sobre la capacidad de importación.

Por otra parte: ¿Que significa concretamente *reinserción internacional de la economía*? Hasta el momento Nicaragua ha conseguido diversificar relativamente sus mercados externos, especialmente a través de la ampliación de sus relaciones con algunas economías del Tercer Mundo y con el área socialista (CAME). Una ampliación de este movimiento no parece destinada a generar transformaciones amplias en un plazo corto. Aparte de las limitaciones a la modificación de la oferta exportable mencionadas más arriba, la capacidad de los países del Tercer Mundo para absorber porciones significativas de exportaciones nicaragüenses parece más bien problemática: por las propias condiciones de crisis económica generalizada que esos países atraviesan, por el carácter errático de sus políticas comerciales, y por su vulnerabilidad ante las mismas influencias nocivas que gravitan sobre la economía nicaragüense.

En lo que toca a los países de CAME, la reorientación del comercio exterior nicaragüense y las líneas de cooperación económica son todavía relativamente reducidas, aunque se encuentran en proceso de franca expansión (Berríos 1985). Una integración decidida de Nicaragua en el área del CAME podría ser beneficiosa para su economía, pero plantea en el corto plazo -y tal vez no tan corto, tensiones y rupturas. En primer lugar, porque una economía como la de Nicaragua debe introducir en su estructura, en sus modalidades de funcionamiento, en su capacidad para regularse,

modificaciones profundas que están aún lejos de alcanzarse y, algunas de ellas, de plantearse. En segundo lugar, porque una integración amplia en el área del CAME implicaría un reacomodamiento de las vinculaciones económicas con el resto del mundo que Nicaragua no parece dispuesta a encarar mientras le queden alternativas. Tercero, porque una decisión de esta índole seguramente alteraría el conjunto de relaciones políticas internacionales que, dificultosamente, el gobierno revolucionario se empeña en mantener -especialmente con los gobiernos constitucionales de América Latina y con los de Europa occidental- como parte de su estrategia de sobrevivencia ante la guerra contrarrevolucionaria sostenida por el gobierno de los Estados Unidos. Es fácilmente previsible en cambio, la progresiva ampliación del sistema de acuerdos de abastecimientos bilaterales sobre la base de convenios anuales o bianuales, en la medida que las restricciones financieras y comerciales con Europa y América Latina se acrecientan.

La estrategia de unidad nacional y economía mixta se mantendrá en el futuro, particularmente la interpretación de ésta que la centra en una alianza amplia con fracciones exportadoras de la burguesía. Es previsible por lo tanto que se mantendrá la línea vigente de definir incentivos económicos, aún a costa de otros sectores sociales.

La concesión de estímulos a algunos estratos capitalistas no es nueva en la historia de las revoluciones de liberación nacional, ni siquiera en las revoluciones socialistas. El caso de la NEP en la Unión Soviética es de sobra conocido. Pero la NEP se introdujo cuando ya la guerra a la contrarrevolución había sido ganada, y para compensar los desajustes generados por la política centralista y colectivista del comunismo de guerra. Este no es el caso de Nicaragua: ni la guerra está terminada, ni se viene de una experiencia colectivista o por lo menos fuertemente centralizada. Finalmente, el *sandinismo de guerra*, a diferencia del comunismo de guerra, plantea como elemento más notorio la ampliación creciente de las alianzas, incluso hacia sectores de la burguesía que inicialmente habían sido caracterizados por la propia revolución como fuertemente opositores, cuando no enemigos.

La posición del gobierno revolucionario y del FSLN sobre este punto es explícita: que se limiten a producir sin intervenir en política; ésta es la condición para su incorporación y permanencia en la unidad nacional, y para su reproducción como clases propietarias. La experiencia histórica -y Nicaragua no es ajena a ella- enseña más bien que la burguesía no produce si no es en condiciones de dominación política. Acepta por lo tanto en Nicaragua las formas exteriores de la nueva situación que le permiten captar el excedente adicional que se le adjudica vía crédito barato, dolarización parcial de los precios agropecuarios, etc., pero los saca del circuito productivo hacia la especulación y, en la medida que puede, hacia el exterior.

Ahora bien: la guerra que por medios militares se libra en las fronteras y en las mon-

tañas no está separada de esta dimensión económica de la lucha de clases que se libra en torno a la política económica, la inflación y el mercado negro, las ganancias y los salarios, y en general por la apropiación del excedente que todavía se genera en la economía nicaragüense. Son dos dimensiones de una misma confrontación, en la que el comportamiento efectivo de la burguesía abona objetivamente el terreno de la contrarrevolución en la medida en que contribuye al deterioro del aparato productivo y coincide en esto con uno de los objetivos explícitos de la guerra contrarrevolucionaria.

Ambas dimensiones de la guerra han venido siendo costeadas principalmente por la misma gente: campesinos y obreros, artesanos, pobres del campo y la ciudad -clases populares en general. Estos son quienes más directamente han sentido el impacto del deterioro de las condiciones de vida provocado por la guerra y la desarticulación de la economía. Ellos son también quienes contribuyen con la inmensa mayoría de los combatientes del EPS y con las víctimas de las incursiones contrarrevolucionarias.

La prolongación de la situación actual plantea la acumulación de presiones y tensiones sobre el futuro próximo de la revolución, su economía y sus bases sociales. Modificar la estrategia no significa necesariamente echarla por la borda, sino buscar una articulación acertada entre la exportación y el consumo básico, entre la gran producción estatal y capitalista -ya que el esquema de economía mixta no está en cuestión- por un lado, y la producción campesina por el otro. En la coyuntura presente de la economía nicaragüense esto significa enfatizar la segunda dimensión de la estrategia -la producción de alimentos- y el desarrollo de la economía sobre una base más auto-centrada, dadas las perspectivas problemáticas que se presentan a la agroexportación. Ahora bien, mayor énfasis en la producción para el mercado interno significa mayor atención a los productores respectivos: fundamentalmente, pero no exclusivamente, los estratos medios e inferiores del campesinado. Por lo tanto, la reorientación de la política de precios, de crédito, de incentivos y de asistencia técnica; mejor dotación de tierras y de infraestructura; cambios en la política de inversiones; mayor atención a los mecanismos de abastecimiento rural; promoción de iniciativas locales para satisfacer las necesidades básicas de la gente a partir de las propias comunidades; desarrollo de capacidades de planificación en pequeña escala y a nivel local; impulso a un involucramiento efectivo de los productores directos en las decisiones que les afectan. Una reorientación de este tipo, o algo equivalente, pero que en todo caso ponga más énfasis en el mercado interno, implica una reorientación paralela de los flujos de excedentes, en detrimento de los sectores beneficiados hasta este momento -incluyendo una proporción grande de las capas medias urbanas.

La experiencia del último año y medio sugiere que la decisión revolucionaria de reorientar su estrategia económica -una decisión obviamente adoptada a regañadientes

está ligada más a las necesidades impuestas por la guerra que a una preferencia ideológica. Dar prioridad a la defensa nacional y a las zonas de guerra no significa únicamente asignar porciones crecientes del presupuesto del gobierno a los gastos militares. Implica también dar prioridad en las políticas del estado a las demandas de los sectores populares ubicados en el teatro de las operaciones -campesinos y obreros del campo.

La nueva orientación no está exenta de contradicciones. El redimensionamiento de los grandes proyectos de inversión tiene lugar junto con la reafirmación de la agroexportación como eje central de la acumulación; la mayor atención a las demandas del campesinado parece deber más, todavía, a la necesidad de reparar injusticias históricas -y restar bases a las interpelaciones ideológicas y al reclutamiento de la contrarrevolución- que a una decisión de apoyarse más claramente en la capacidad del campesinado como agente de la producción.

Por su lado, la política de precios al consumidor insiste en discriminar contra los grupos de ingresos más bajos; el deterioro ostensible y acelerado del transporte colectivo va de la mano con el mantenimiento de la política de importación subsidiada de automóviles; los viajes al exterior -con pasajes pagados en dólares- están en auge, mientras la situación de la educación pública y de los hospitales es crítica. La enumeración podría prolongarse, pero lo señalado es suficiente para reconocer la decisión del gobierno revolucionario y del FSLN de mantener los estímulos económicos que abonan las lealtades políticas de las capas medias urbanas y de los núcleos sobrevivientes de la burguesía *patriótica*.

En condiciones de rápida mutabilidad como las actuales, es difícil proponer hipótesis específicas sobre el curso que habrá de recorrer la compleja realidad nicaragüense, y la orientación concreta de la política económica. El estilo sandinista consiste en privilegiar el corto plazo y prestar atención estrecha a las correlaciones de fuerzas que se generan en la realidad objetiva. Todo indica que será en definitiva el propio curso de la guerra el que se encargará de definir la orientación que habrá de prevalecer.

La guerra popular de defensa nacional es una etapa inevitable de las revoluciones sociales en la época del imperialismo. A medida que el poder popular se consolida y que las transformaciones socioeconómicas se desarrollan, la dominación externa, que antes era eminentemente económica y política, asume ahora el carácter de agresión militar. Frente a esto las revoluciones de liberación nacional en el Tercer Mundo han tendido a adoptar una de dos posiciones: enfocar la guerra como un obstáculo para el desarrollo y la profundización del proyecto de transformación social y asumir que, mientras la guerra continúe la necesidad de priorizar la defensa obliga a desacelerar o dejar momentáneamente de lado la transformación socioeconómica; o bien, ver en la guerra de defensa nacional la causa que hace necesario el avance

en profundidad del proyecto revolucionario y la reformulación de los acuerdos sociales originales. La posición de la Revolución Sandinista es ambigua. Por un lado, el discurso oficial enfatiza las resonancias policlasistas de la unidad nacional en el marco de la defensa y posterga para después del conflicto el avance de los cambios socioeconómicos; de alguna manera, es la adaptación a la coyuntura actual, del discurso de los primeros años de la revolución que antepone una etapa de *reconstrucción nacional* a la etapa de las transformaciones estructurales. Por otro lado, la evidencia de que, para que la defensa nacional funcione de manera integral y efectiva, es necesario profundizar las transformaciones revolucionarias y priorizar la satisfacción de las demandas populares.

Parece claro, sin embargo, que en lo que a la economía se refiere, las opciones abiertas a la Revolución Sandinista son muy reducidas. Se trata en realidad de un problema que es común a otras revoluciones populares en sociedades muy atrasadas y muy abiertas al mercado internacional. Durante un período que puede ser largo, estas economías en vías de reestructuración -o, si se prefiere, en transición- *no son viables*.

La especialización agroexportadora competía en el mercado capitalista internacional sobre la base de una intensa explotación de la fuerza de trabajo -salarios por debajo del costo de reproducción de la mano de obra, relaciones laborales autoritarias, etc. La revolución termina con esto, o en todo caso mejora sensiblemente las condiciones de trabajo y de vida de los obreros y campesinos, y eleva los costos de producción por encima de los precios internacionales; La competitividad externa desaparece o se reduce drásticamente. La reforma agraria y el mejoramiento de las condiciones de vida de los campesinos crea problemas serios en la oferta de fuerza de trabajo para la agroexportación. La alternativa de recurrir a una reconversión de la agroexportación en términos de inversiones intensivas en capital conduce en el corto plazo a un incremento del endeudamiento externo, aceleración de las tensiones inflacionarias internas, desajustes generalizados; el bloqueo de fondos en los organismos multilaterales obliga a recurrir a financiamiento en condiciones crecientemente onerosas. Además de todo esto, la competitividad internacional de una agroexportación intensiva en capital es cuestionable, y en el caso de Nicaragua su principal rubro de exportación -el café- no es mecanizable.

Por su lado una estrategia basada en las necesidades básicas de las clases trabajadoras -obrerros del campo y la ciudad, campesinos- encuentra limitaciones en la reducida capacidad de generación de excedentes, la dimensión muy estrecha del mercado interno, la enorme magnitud de la población no productiva, el atraso técnico y organizativo de las actividades orientadas hacia el consumo interno, su dependencia fuerte de insumos importados.

En consecuencia, *mientras el proceso de reestructuración se lleva a cabo, estas eco-*

nomías necesitan de subsidio externo, o de lo contrario colapsan. Este no fue el caso de la revolución soviética ni de la revolución china, que tuvieron lugar en economías cerradas, de dimensión continental, prácticamente autosuficientes. Pero es el caso de las revoluciones sociales en el resto de Asia, en Africa y en América Latina.

Bien miradas las cosas, se trata de uno de los temas más antiguos en la polémica acerca de la viabilidad del socialismo en formaciones capitalistas atrasadas. Se planteó por primera vez en el siglo XIX, en torno a la posibilidad del socialismo en Rusia. Las respuestas de Marx ante las interrogantes que le formulaban en este sentido los *narodniki* fueron ambiguas; Engels, en cambio, ligaba la posibilidad del socialismo en los países atrasados al triunfo de la revolución en Occidente, y a la asistencia que las revoluciones triunfantes prestaran a los países atrasados (Engels 1894). La revolución no triunfó en Occidente sino en Rusia, pero la idea central se mantiene: el auxilio de las revoluciones "avanzadas" es imprescindible para garantizar la *viabilidad inicial* de las revoluciones sociales en economías atrasadas y extremadamente dependientes (cf. Lenin 1920).

Esto, a su turno, plantea una problemática doble, que aquí sólo podemos indicar. Por un lado, la cuestión relativa a la disponibilidad de ese *subsidio*; o, para ponerlo de otra manera: ¿en qué condiciones qué sociedades avanzadas -revolucionarias o no- están dispuestas a prestar una colaboración tan decisiva, pero tan costosa? Por otro lado, la cuestión referida a la capacidad de la sociedad periférica de convertir ese *subsidio* en *desarrollo*: el contenido y orientación de su estrategia económica, la eficacia de los instrumentos de política, la capacidad de gestión del estado, etc.

En todo caso, no se trata únicamente de una cuestión técnica -la no viabilidad de las economías en vías de reestructuración- sino de la misma sobrevivencia de estas sociedades. Como señalamos hace un momento, la *transición* tiene como un ingrediente central la agresión militar del imperialismo. En un enfrentamiento tan desigual, el esfuerzo de todo el pueblo es el arma más poderosa de los países pobres, pero no basta. Sin el complemento de la cooperación y la solidaridad internacionales, no sólo el futuro de la economía es precario. Ante todo, la propia vida y la libertad de sus habitantes está en cuestión.

NOTAS

1. Entre 1979 y mediados de 1985 el poder adquisitivo del salario real, medido por una canasta de consumo básico se redujo entre 40 % y 75 % de acuerdo al tipo de canasta que se emplee como índice (Stahler-Sholk 1985, cuadro 12).
2. Cf. la exposición del programa en *Barricada* 9 de febrero de 1985.

3. La inversión pública en educación, por ejemplo, se redujo de un 6,8 % el total en 1980 a 1,2 % en 1984.
4. Cf. declaraciones del Comandante de la Revolución Jaime Wheelock, ministro de MIDINRA, en *Barricada*, 13 de enero de 1986.
5. Señalemos a título ilustrativo que en la región VI (departamentos cafetaleros de Matagalpa y Jinotega) en 1985 se distribuyeron 45.835 machetes frente a 4.943 distribuidos en 1984; 44.690 pares de botas en 1985 y 20.392 en 1984; etc.
6. Cf. por ejemplo las declaraciones del presidente de la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos (UNAG) en un reportaje reciente: "Como UNAG no estuvimos de acuerdo en dar incentivos en dólares. Es incorrecto, desde el punto de vista ideológico, porque parece fortalecer, en la mentalidad del campesinado, la moneda del gobierno que nos agrede. Además, abastecemos al mercado negro. En lugar de dar 15 millones de dólares como incentivo deberíamos comprar 1.600 camionetas de doble tracción y venderse las a los productores para que saquen sus cosechas (...)" Cf. entrevista a Daniel Nuñez en *Pensamiento Propio* 30 (enero-febrero 1986) 31:36.
7. "... esta mejoría en el abastecimiento al campo, sólo ha sido posible gracias al sacrificio de (los) trabajadores de la ciudad, que han visto afectados sus ya reducidos niveles de abastecimiento, particularmente los más pobres, pues los ricos siempre tienen posibilidad de conseguir los productos, aunque sea a precios muy elevados". Comandante Luis Carrión, discurso inaugural del Primer Congreso Campesino; cf. *Barricada* 28 de abril de 1986.
8. Por ejemplo, a pesar de todas las tensiones acumuladas durante 1984 el programa económico para 1985 fijó como meta un coeficiente de inversiones de casi 21 % (con relación al PIB), pero la realidad obligó a reducirlo en casi un tercio, a alrededor de 15 %. El programa técnico-económico de 1986 fijó una meta anual de crecimiento del PIB superior al 5 %, apostando posiblemente a un alza en las exportaciones. Sin embargo en el discurso pronunciado durante la celebración del 1 de Mayo el Presidente Daniel Ortega anunció que, con motivo de la continuación de la caída de los ingresos de exportación el programa de ese año sería sometido a nuevos ajustes. Cf. el texto del discurso en *Barricada*, 2 de mayo de 1986.

REFERENCIAS

- Berrios, R., 1985, *Economic Relations between Nicaragua and the Socialist Countries*. Washington D.C.: Woodrow Wilson International Center for Scholars (mimeo).
- Coronel, M., 1984, "Una estrategia para superar la dependencia y el subdesarrollo", en *Revolución y desarrollo* 2 (julio-septiembre), 9-15.
- Engels, F., 1894, "Postscriptum a Acerca de la cuestión social en Rusia", en K. Marx y F. Engels, *Escritos sobre Rusia* (México: Siglo XXI, 1980) 89:90.
- Lenin, V. I., 1920, "Informe de la comisión para los problemas nacional y colonial, presentado al II Congreso de la Internacional Comunista", en V. I. Lenin, *La lucha de los pueblos de las colonias y países dependientes contra el imperialismo* (Moscú: Editorial Progreso, 1979) 409-410.

- MIDINRA, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y Reforma Agraria, 1985, *Plan de Trabajo. Balance y perspectivas 1985*. Managua: MIDINRA.
- Núñez, O., 1980, *El Somocismo: Desarrollo y contradicciones del modelo capitalista agroexportador en Nicaragua (1950-1975)*. La Habana: Centro de Estudios de América. Managua, mimeog.
- Stahler-Sholk, R., 1985, *Política salarial en Nicaragua, 1979-85*. Managua, sin publicar.
- Vilas, C. M., 1984, "Reforma agraria, agroexportación y empleo rural en Nicaragua", en *Canadian Journal of Latin American and Caribbean Studies* 9 (18), 111:132. 1985a, "Unidad nacional y contradicciones sociales en una economía mixta: Nicaragua 1979-1984", en R. Harris y C. M. Vilas (eds.), *La Revolución en Nicaragua* (México: Ediciones ERA). 1985b, "Nicaragua im Jahre 1985: Veränderungen und Spannungen in der Wirtschaft", en *Istmo: Studien zu Zentralamerika* 10 (septiembre) 4:33. 1986, *The Sandinista Revolution. National Liberation and Social Transformation in Central America*. New York: Monthly Review Press.
- Wheelock, J., 1976, *Imperialismo y dictadura*. México: Siglo XXI Editores.